



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

Recomendaciones para el actual proceso de paz

Autor: Ana Seco Díaz

Director: Antonio Javier Ramos Llanos

Madrid
Junio de 2014

Resumen

El presente trabajo analiza los aspectos económicos del conflicto colombiano en el actual contexto de los diálogos de paz. Se analizan las causas del mismo, entre las cuales cabe destacar la enorme desigualdad y pobreza del país, y sus consecuencias tanto económicas como sociales, que demuestran la importancia que tiene para Colombia la consecución de una paz duradera. Además se investigan los factores que posibilitan este conflicto, entre los que destaca la minería como nueva fuente de financiación. Finalmente, se presentan una serie de recomendaciones, basadas en la investigación realizada, que permitan un proceso de paz exitoso y duradero. Este proceso debería ser, en primer lugar, asumido por toda la población. A partir de ahí, el Gobierno debería centrarse en, por un lado, mejorar el nivel de vida de la población, especialmente disminuyendo el nivel de desigualdad y pobreza, y por otro, en evitar la existencia de incentivos económicos al crimen.

Palabras clave

Colombia, conflicto armado, desigualdad, proceso de paz, costes económicos, desarrollo humano

Abstract

This paper analyses the economic aspects of the Colombian conflict, in the context of the current peace talks. The main causes of the conflict are analysed, including the high levels of inequality and poverty in the country, as well as the consequences, both economic and social, which go to show the importance of an achievement of a sustainable peace for Colombia. In addition, the factors that make the conflict possible are investigated, amongst which mining as a source of funding stands out. Finally, a number of recommendations based on the research are presented, that would allow for a successful and lasting peace process. This process should first of all, be undertaken by the entire population. Then, the Government should focus on improving the living standards of the population, most importantly by decreasing the level of inequality and poverty, and on preventing economic incentives to crime.

Keywords

Colombia, armed conflict, inequality, peace process, economic costs, human development

Índice

1. Introducción	4
2. Revisión de literatura	6
2.1. Causas económicas de la violencia.....	6
2.2. Consecuencias económicas de la violencia.....	7
3. El conflicto armado en Colombia	9
4. Evolución reciente de la economía colombiana	11
4.1. Una visión positiva	11
4.2. Principales retos para Colombia	14
4.3. La desigualdad y el crimen	16
5. Costes económicos y sociales del conflicto en Colombia	19
5.1. Efectos macroeconómicos	19
5.1.1. Crecimiento económico	19
5.1.2. Inversión	21
5.1.3. Gasto público	22
5.1.4. Productividad	22
5.1.5. Otros factores	23
5.2. Efectos sociales	24
5.2.1. Aumento de la tasa de homicidios	25
5.2.2. Educación.....	26
5.2.3. Desplazamientos forzados	27
5.2.4. Otros factores	27
6. Motivaciones económicas de la violencia	30
6.1. Factores de reducción de costes	31
6.2. Fuentes de financiación	33
6.2.1. Narcotráfico	33
6.2.2. Extorsión	35
6.2.3. Secuestros	37
6.2.4. Economía legal.....	38
7. Conclusión: el fin del conflicto armado	39
7.1. El proceso de paz	39
7.2. Conclusiones y recomendaciones	40
7.2.1. El desarrollo humano como salida del conflicto	42
7.2.2. Eliminación de incentivos al conflicto.....	44
7.2.3. Observaciones finales	44
Bibliografía	46

Tablas y gráficos

Tabla n° 1: Evolución reciente de la economía	12
Tabla n° 2: Indicadores de desarrollo humano	13
Gráfico n° 1: Evolución del IDH	13
Gráfico n° 2: Evolución del PIB Colombia y Latinoamérica	21
Gráfico n° 3: Evolución del número de secuestros	38

1. Introducción

El presente trabajo de investigación busca analizar los aspectos económicos del conflicto armado colombiano, en el actual contexto de los diálogos de paz entre el principal grupo insurgente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos, para después ofrecer recomendaciones para la mejor evolución de este proceso, que permita una paz real y duradera. Después de más de 50 años de guerra interna en Colombia, parece posible la llegada a un acuerdo que finalmente posibilite la paz en el país, y es esta situación de gran actualidad, junto con el atractivo que tiene para mí el análisis económico de los conflictos armados, lo que me ha hecho interesarme por esta cuestión.

Para llevar a cabo el objetivo se ha optado por un método inductivo, en el cual se ha partido de un análisis de la situación del crimen en Colombia y de sus manifestaciones económicas, investigando qué características de la evolución económica actual del país han podido intensificar el conflicto, los costes en términos económicos de éste, y los factores que posibilitan a los grupos armados seguir actuando en este país. Como consecuencia de esta investigación, se han podido realizar una serie de recomendaciones que se deberían tener en cuenta para que el proceso de paz sea efectivo y duradero.

El conflicto colombiano ha suscitado un gran interés por parte de muchos autores, y entre ellos muchos economistas que han intentado buscarle un sentido económico. En el apartado referido a la revisión de literatura voy a ofrecer un marco general de los principales autores que se han interesado en este análisis económico del conflicto colombiano. Puedo adelantar, sin embargo, que éstos han seguido metodologías muy variadas, que incluyen enfoques más cualitativos, como el que sigue el presente trabajo, y otros que intentan formular modelos matemáticos que expliquen la realidad. La enorme variedad en los trabajos referidos a este tema se debe a que un conflicto tan complejo como el colombiano, que ha ido evolucionando a lo largo de los años, imposibilita la formulación de una teoría “final” y obliga a un estudio continuo, que se vaya adaptando a las condiciones del país. El presente trabajo representa una modesta contribución a los estudios sobre el crimen en Colombia, cuya originalidad

radica en la aplicación de la investigación económica del conflicto armado a un tema de gran actualidad como es el proceso de paz actual, intentando ofrecer recomendaciones basadas en los aspectos investigados.

El trabajo se estructura en cinco partes. En la primera se describe brevemente el contexto del conflicto armado colombiano, para ofrecer una visión general de los principales grupos armados y sus ámbitos de actuación y para facilitar la comprensión del resto del trabajo a alguien no tan familiarizado con este tema. El segundo punto examina la situación actual de la economía colombiana, sus principales fortalezas y debilidades. Asimismo, se investiga cómo estas debilidades, y en concreto la desigualdad, pueden estar instigando el crimen en el país. En una tercera parte se analizan los costes para el país del crimen organizado, tanto los aspectos macroeconómicos -influencia en el crecimiento o en la productividad, por ejemplo- como los aspectos sociales, los cuales también podrían medirse en términos económicos. El cuarto punto examina las motivaciones económicas de la violencia, es decir, los factores que han permitido a los actores armados seguir actuando durante tantos años, y se centra principalmente en la evolución reciente de estos factores. Finalmente, tras ofrecer una visión general del proceso de paz actual, se aplican los conocimientos adquiridos en apartados anteriores para la formulación de recomendaciones al actual proceso de paz.

2. Revisión de literatura

En este apartado se realiza una revisión crítica de los autores más relevantes que han investigado la dimensión económica del conflicto armado colombiano. Esta revisión no pretende, por tanto, abarcar estudios económicos del crimen en general, que, aunque interesantes, superan el objetivo de este trabajo. Como vimos, el conflicto colombiano ha ido evolucionando a lo largo de los años y los estudios sobre éste han tenido que adaptarse a las circunstancias, por lo que generalmente voy a presentar las aportaciones de los autores de forma cronológica. Además, los autores que abordan el conflicto desde una perspectiva económica suelen dividirse entre aquellos que estudian las causas económicas de la violencia y los que estudian sus consecuencias económicas. Por tanto, me parece conveniente realizar una revisión de los trabajos de los principales autores, comenzando por los que estudian las causas y siguiendo por los que estudian las consecuencias de la violencia en Colombia.

2.1. Causas económicas de la violencia

Un acercamiento pionero a las causas económicas de la violencia fue el realizado por un grupo de economistas colombianos reunidos en la Comisión de Estudios sobre la Violencia en 1987. Los autores por primera vez hablan de una violencia que no sólo tiene causas políticas, sino también económicas, entre ellas la desigualdad, la pobreza o la falta de educación. López y García (1999), en una publicación para el Banco Mundial señalan que más que la pobreza, es la desigualdad la que produce la violencia en el caso colombiano.

Rubio (2002) profundiza en el estudio de las causas relacionadas con la descentralización administrativa y la fragilidad de la justicia, y explica la enorme importancia que tienen los recursos energéticos para los autores armados, concluyendo que el narcotráfico es el sector que se encuentra más relacionado con la política colombiana. Ocampo (2004) señala que Colombia, a pesar de tener características económicas y políticas similares a otros países en desarrollo, presenta

niveles de violencia más elevados. Ofrece como causas del conflicto la generalización del narcotráfico, la geografía abierta o el poder tan fragmentado del país.

Sánchez y Chacón (2005) en su análisis distinguen dos etapas en el conflicto armado según las causas principales que motivaron la violencia. En una primera etapa, entre 1974 y 1982, la violencia estaría explicada por variables socioeconómicas como son la pobreza o la desigualdad. Entre 1982 y 2002, sin embargo, la violencia se explica por la descentralización del Estado, junto con la debilidad de la justicia, que incentiva a los grupos armados a la búsqueda de poder mediante el dominio de ciertos territorios locales.

2.2. Consecuencias económicas de la violencia

En cuanto a las consecuencias económicas de la violencia, uno de los primeros autores en abordar el tema fue el economista colombiano Mauricio Rubio, en 1995, quién estudió cómo el surgimiento del narcotráfico en los años 80 en Colombia provocó un repunte del crimen y a su vez un descenso del crecimiento económico, que según sus cálculos supondría alrededor de un 2% del PIB anual. Además, indica que los efectos también se verían a largo plazo en otras variables económicas como la pérdida de productividad o la inversión. Pocos años después, Trujillo y Badel (1998) señalan que el conflicto colombiano ha tenido costes directos, consistentes en la pérdida de capital físico y humano, además de costes indirectos complementarios. Estiman el coste del conflicto entre 1991 y 1996 en un promedio anual de 2,9% del PIB.

Como novedad, Cárdenas (2001) explica que la desaceleración del crecimiento entre 1980 y 2000 se debe a un descenso en la productividad, el cual, a su vez, fue causado por el incremento de la criminalidad en esos años, la cual desvió capital y trabajo hacia actividades improductivas. Por otro lado, Echeverry, Salazar y Navas (2001) señalan que a pesar de que la pérdida en crecimiento no es muy alta, ésta se multiplica en casos de conflictos tan duraderos como el de Colombia, teniendo, en suma, un impacto muy significativo. González (2006), investiga el impacto regional del

conflicto y concluye que éste tiende a aumentar la divergencia económica entre departamentos, al incidir más negativamente en el crecimiento económico de las regiones donde existe más violencia.

Por último, Díaz y Sánchez (2008) analizan las repercusiones sociales del conflicto, entre ellas, el aumento del número de homicidios, secuestros y personas desplazadas en los municipios con presencia de grupos armados. Además, en estos municipios la tasa de matriculación primaria y secundaria fue menor, existen menos afiliados al régimen subsidiado de salud y la mortalidad infantil ha descendido en menor proporción que en los otros.

3. El conflicto armado en Colombia

Para poder realizar una breve exposición del crimen organizado en Colombia, se ha seguido el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “El conflicto, callejón con salida” (2003), que ofrece una visión muy amplia del crimen en Colombia, con la limitación de que fue escrito en el 2003, completando con un informe de Vargas y Caruso publicado en enero de este mismo año.

Colombia se encuentra entre los países más violentos de América Latina y además, el conflicto colombiano es uno de los de más larga duración. A pesar de que existieron conflictos en Colombia desde mucho antes, la mayoría de los autores coinciden en que el origen del conflicto actual tuvo lugar a finales de los años cuarenta, tras un período de casi medio siglo de relativa calma. El 9 de abril de 1948, como consecuencia del asesinato de Jorge Elíecer Gaitán, candidato a la presidencia del Partido Liberal, surgieron quejas partidistas y una fuerte reacción popular, que desembocaron en una de las guerras civiles más violentas de la historia colombiana, período conocido como La Violencia. Fue en esta época cuando empezaron a surgir los grupos de autodefensa que se convirtieron más tarde en los grupos guerrilleros comunistas. En 1958, los partidos Liberal y Conservador firmaron un pacto conocido como el Frente Nacional, para repartirse el poder, excluyendo a cualquier otra organización política. Este pacto, sin embargo, solo consiguió aumentar el descontento del pueblo colombiano, que se siguió organizando al margen del Gobierno. A mediados de los años sesenta se formaron dos organizaciones guerrilleras, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), activas hoy en día. Las más importantes, las FARC, surgieron de las guerrillas comunistas insatisfechas con la exclusión de la izquierda provocada por el pacto de gobierno. Otro grupo guerrillero surgido en esa época, y que tuvo un importante papel en la época siguiente, aunque ya se encuentra desmovilizado, fue el Movimiento 19 de Abril (M-19), que tuvo como elemento diferenciador el moverse en un ámbito más urbano.

En cuanto al narcotráfico, el país comenzó exportando marihuana a finales de los años setenta, para luego pasar a producir, con pasta de coca importada de Bolivia y Perú, y

exportar cocaína a Estados Unidos. A principios de los noventa los principales cárteles de la droga fueron desmantelados, y la guerrilla se hizo con la mayor parte del negocio de la droga. Debido a la prohibición por parte de Estados Unidos de conexiones aéreas con Perú y Bolivia, Colombia comenzó a cultivar su propia cocaína, convirtiéndose en el mayor productor a nivel mundial. Durante estos años, los diferentes ejércitos privados financiados por terratenientes y capos para defenderse de la extorsión de las guerrillas se unieron para formar las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comúnmente conocidas como grupos paramilitares, los cuales también se involucraron en el negocio de la droga.

Todo este pasado de violencia y de grupos armados enfrentados entre sí ha convertido a Colombia en un país donde el crimen, los desplazamientos forzados de la población, los secuestros y la corrupción son el pan de cada día. En cuanto a la corrupción, ha habido rumores de colaboración entre el Estado y principalmente grupos paramilitares, así como han sido frecuentes las acusaciones de que determinados partidos políticos obtenían financiación para sus campañas del narcotráfico.

Hoy en día, la minería ilegal y el negocio del petróleo están adquiriendo importancia como fuente de financiación para los grupos armados, perdiendo importancia el negocio del narcotráfico. Los principales grupos que siguen activos en la actualidad son las FARC y ELN, con las que el Gobierno está intentando llegar a un acuerdo para poner fin a 50 años de conflicto.

4. Evolución reciente de la economía colombiana

En este apartado se pretende ofrecer una visión general de la situación actual de la economía colombiana. En primer lugar se explican brevemente los avances en los últimos años en las variables económicas más relevantes (PIB, desempleo, inflación y otras), y el desarrollo en el ámbito social medido a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH). A continuación, se presentan los principales retos de la economía de Colombia, utilizando, asimismo, indicadores económicos y sociales. En los casos relevantes, se ha examinado la posible conexión entre los retos identificados y el desarrollo de la violencia. Entre ellos, la desigualdad parece especialmente destacable, por lo que, en tercer lugar, se ha realizado un análisis de su influencia en el aumento de la violencia.

4.1. Una visión positiva

En los últimos años, según indica el último informe del IMF (2014), la economía colombiana ha demostrado un desempeño económico muy favorable. Las autoridades económicas del país han llevado a cabo una mejora en la política económica que ha podido responder a los shocks: control de la inflación, mantenimiento de un tipo de cambio flexible, reglas fiscales, supervisión financiera muy eficaz, unido a una gestión efectiva de la demanda. En este apartado voy a examinar la evolución de los principales indicadores económicos y de desarrollo de la economía colombiana.

En primer lugar, podemos observar la evolución de la producción y la situación actual del cuadro macroeconómico del país: en el segundo semestre de 2013 se ha producido una fuerte recuperación del crecimiento real del Producto Interior Bruto, siendo la tasa de crecimiento en este año de un 4,3%, en comparación con un 4% en 2012. Además, se prevé un crecimiento en el presente ejercicio de un 4,5%, manteniendo la tendencia actual.

Otros indicadores también ven tendencias favorables: la tasa de desempleo se encuentra en el nivel más bajo alcanzado en la última década (9,7% en 2013), y la

inflación se encuentra sólo ligeramente por debajo del objetivo, en un 1,9%. En cuanto a las cuentas exteriores, la balanza por cuenta corriente muestra un déficit moderado, de un 3,3%, una décima más que en el año anterior, y las reservas internacionales pueden cubrir la deuda externa a corto plazo, a pesar del aumento de ésta, especialmente en el sector privado (Dinero, 2014).

A pesar de las previsiones favorables de crecimiento y de evolución de la inflación, y de la aparente estabilidad de la economía colombiana, existen riesgos que pueden afectar a estas expectativas. Los principales son la fuerte caída en los precios de las materias primas (en especial el petróleo), el deterioro de las condiciones financieras globales y la volatilidad de la política monetaria en los Estados Unidos.

En el cuadro a continuación se han recogido los principales indicadores de la evolución económica reciente:

Tabla n° 1: Evolución reciente de la economía

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Est 2013	Proy 2014
Crecimiento PIB real (%)	6,9	3,5	1,7	4	6,6	4	4,3	4,5
Deuda pública / PIB (%)	32,3	31,9	35,2	37	35,7	32	35,2	34,7
Déficit cuenta corriente / PIB (%)	-2,9	-2,8	-2,2	-3,1	-2,9	-3,2	-3,3	-3,3
Deuda externa / PIB (%)	20,8	20,4	21,6	22,8	22,8	20,9	24	24,5
Reservas internacionales / Deuda externa a corto plazo (%)	198,7	207,3	239,9	198,4	154,1	229,2	164,3	167

Fuente: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI, 2014)

En el ámbito social también se ha dado un gran desarrollo en los últimos años, que podemos observar en el avance en los indicadores del Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por el PNUD, y otros indicadores relevantes. En cuanto al IDH, éste se calcula en base a tres categorías: educación, esperanza de vida al nacer y renta. En el Informe sobre Desarrollo Humano del 2013 Colombia se encuentra en el puesto 91 (el mismo que el año anterior), y está clasificada como un país con un desarrollo humano alto, a pesar de encontrarse entre los últimos países en esta categoría y por debajo de la mayoría de los países de América del Sur. En la tabla a continuación se

pueden ver los indicadores de IDH de Colombia para 2013 (aunque en muchos casos los datos son de años diferentes ya que no se recogen todos los años).

Tabla n° 2: Indicadores de desarrollo humano

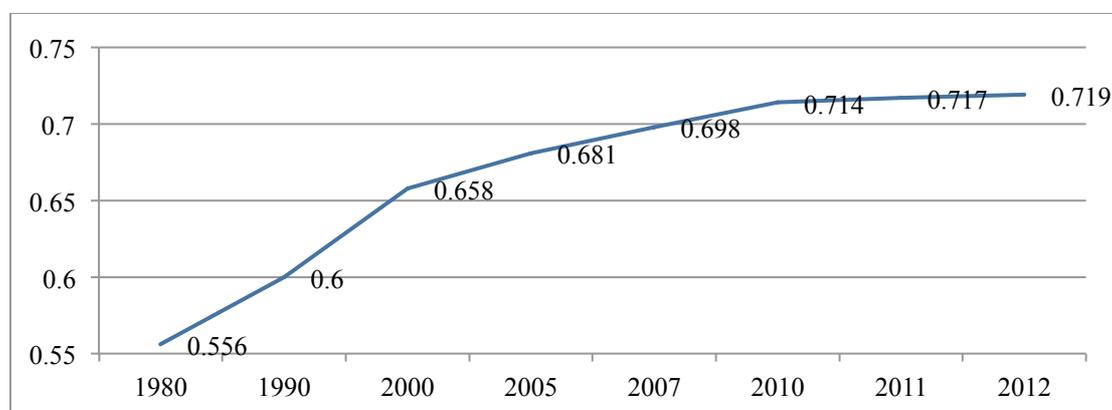
IDH	Esperanza de vida al nacer	Años promedio escolaridad	Años esperados escolaridad	Ingreso	Clasificación según INB per cápita menos según IDH	IDH no referido a ingresos
				Nacional Bruto (INB) per cápita (\$ PPP)		
	2012	2010	2011	2012	2012	2012
0,719	73,9	7,3	13,6	8711	-6	0,751

Fuente: elaboración propia a partir de datos del PNUD (2013)

La esperanza de vida se encuentra dentro de la media, y ha aumentado algo más de un año en la última década. Los años promedio de escolaridad son bastante preocupantes ya que indican que el número de años medios que ha pasado un adulto en el sistema educativo es tan solo siete. Sin embargo, según datos del Banco Mundial (2014), la tasa de alfabetización ha aumentado bastante en la última década, de un 81% en 1993 a un 94% en 2011. El IDH no referido a ingresos, el cual sólo tiene en cuenta en su cálculo los valores de esperanza de vida y educación, es solo ligeramente superior.

A título ilustrativo, se ha recogido en el gráfico a continuación la evolución del IDH en Colombia, que ha sido positiva desde 1980.

Gráfico n° 1: Evolución del IDH



Fuente: elaboración propia a partir de datos del PNUD (2013)

4.2. Principales retos para Colombia

Hemos visto que la trayectoria de Colombia en la actualidad ha tenido una evolución bastante positiva, tanto en indicadores puramente económicos como en aquellos relativos al desarrollo humano. Sin embargo, no podemos evaluar la situación real de un país fijándonos solo en datos numéricos, y en cuanto al desarrollo humano, existen muchos otros indicadores no contemplados en el IDH, que también hay que tener en cuenta. En este apartado voy a analizar las debilidades de la economía de Colombia y los retos para el futuro.

“Colombia, ¿país de alto desarrollo humano?”, es el título de un artículo de El Espectador de marzo de 2013. En él se indica que mientras que el PNUD sitúa a Colombia entre los países con alto desarrollo humano, existe una parte que no se contempla: el Banco Mundial sitúa al país como uno de los más desiguales del mundo. Según Jairo Santander, entrevistado por el periódico, el IDH para Colombia es engañoso. En efecto, la desigualdad es uno de los mayores problemas en la economía colombiana, lo que podemos ver reflejado en el IDH corregido por desigualdad, que es de 0,519, muy por debajo del 0,719 que vimos antes, haciendo perder a Colombia once puestos en la clasificación de países, con lo que ya no se incluiría al país entre los de alto desarrollo humano.

Además, el coeficiente de Gini, que mide la equidad de la distribución de ingresos entre la población de un país, a pesar de haber tenido una evolución positiva en los últimos años, es de 55,9, situando a Colombia entre los quince países más desiguales del mundo, según datos del Banco Mundial. Dicho de otra forma, los colombianos con más ingresos, en el 20% superior de la escala, obtienen el 60% de los ingresos totales, mientras que la quinta parte más pobre de la población recibe solamente un 3%.

Como el propio Informe sobre Desarrollo Humano (2013) indica, a pesar de que en las últimas décadas ha habido un gran progreso en el IDH en el mundo, este progreso no es suficiente: “no es deseable ni sostenible que el crecimiento del IDH esté acompañado por una creciente desigualdad en los ingresos, patrones insostenibles de

consumo, elevado gasto en defensa y escasa cohesión social”. Añade que la desigualdad puede reducir o incluso impedir progresos en materia de desarrollo humano.

Efectivamente, otra de las causas de la falta de precisión del IDH en Colombia es que éste está muy mal distribuido geográficamente, es decir, existen regiones colombianas más apartadas donde el acceso a la salud o a la educación es mucho más bajo, unido a unos ingresos de la población mucho menores, ya que la desigualdad económica no solo se da entre pobres y ricos sino también entre las distintas regiones del país. Según el último Informe Nacional de Desarrollo Humano (2011) de Colombia, existen enormes diferencias en las condiciones de vida entre los diferentes departamentos: en 2012, el IDH más alto lo tuvo Bogotá (0,90) y los más bajos, Chocó (0,73) y La Guajira (0,69).

Estos datos los confirma la última Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2013), donde observamos enormes disparidades entre las principales ciudades y el resto del país. Por citar algunos ejemplos, el analfabetismo es 9 puntos porcentuales mayor en las regiones más apartadas y el promedio de años de educación mucho menor. Por añadidura, en las ciudades principales sólo un 34,2% de los cabezas de familia se considera pobre, mientras que en el resto del país esta cifra asciende a un 63,8%.

Una de las principales razones de la desigualdad en Colombia es el desempleo, ya que la mayor parte de la renta de las personas en el país viene del trabajo, de acuerdo con Moller (2012). Colombia, a pesar de que ha visto bajar su nivel de paro en los últimos años tiene la mayor tasa de paro de Latinoamérica (Rebossio, 2014). La tasa de paro juvenil es aún mayor, lo que puede suponer exclusión y una eventual caída en redes criminales. Por otro lado, la informalidad en el empleo aumenta aún más las divergencias salariales, debido al gran coste que supone el empleo formal en el país: un salario mínimo que representa el 70% del salario medio y altos costes extra salariales. El empleo vulnerable (trabajadores por cuenta propia más trabajadores en negocios familiares) en Colombia llega casi al 50%, y sólo la mitad del empleo tiene cobertura sanitaria o de pensiones. Según Nestares (2001), existe una relación causal entre el desempleo y la criminalidad, que se debe a la frustración de los trabajadores y

a una valoración de las actividades criminales en comparación con actividades legítimas, que influye en mayor medida en los jóvenes.

En Colombia, junto a la desigualdad, la pobreza es uno de los mayores problemas. En este punto conviene destacar positivamente el importante descenso en el número de personas en situación de pobreza que se ha dado entre 2002 y 2012, la cual se redujo del 49,7% a un 32,7%. En términos absolutos, 428 mil personas salieron de la pobreza en 2012. En cuanto a la pobreza extrema, en el mismo período descendió siete puntos porcentuales y se encuentra ahora en un 10.4% (datos del Departamento Nacional de Planeación -DNP, 2013).

A pesar de esto, podemos ver que el porcentaje de personas en situación de pobreza sigue siendo muy alto, y si tenemos en cuenta que Colombia está clasificado como un país de ingreso medio alto, resulta aún más alarmante que se mantenga un nivel de pobreza tan elevado, dado que pone de manifiesto la situación de enorme desigualdad del país. De hecho el porcentaje de personas pobres en zonas rurales en 2012 es bastante más alto (46,8%). Según el informe del Banco Mundial (2012) la pobreza habría sufrido un descenso mucho mayor (de hasta 10 puntos porcentuales) si la situación de desigualdad no fuese tan acentuada. Según algunos autores (Comisión de Estudios sobre la Violencia, 1987; Sánchez y Chacón, 2005), la pobreza es una de las principales causas del conflicto colombiano, unida a la desigualdad o a la falta de educación y otros factores socioeconómicos. Sin embargo, otros autores, como López y García (1999), señalan que es más bien la desigualdad, y no la pobreza, la que provoca un aumento en los niveles de violencia.

4.3. La desigualdad y el crimen

Según el informe del Banco Mundial (2012) mencionado en el apartado anterior, la desigualdad no solo influye en el nivel de pobreza del país, sino que tiene una influencia muy importante en el tema que nos concierne, el crimen. Una gran desigualdad (y un alto nivel de pobreza) provoca inestabilidad, lo que a su vez impulsa conflictos relacionados con la distribución y tensiones sociales. Esto tiende a

debilitar la legitimidad de las políticas y las instituciones. El propio informe del PNUD del 2003, dice que a pesar de la complejidad de la relación entre violencia y desigualdad, sin duda “la desigualdad es una condición necesaria pero no suficiente de la guerra interna”.

Otro estudio que confirma esta relación entre desigualdad y guerra interna es el de Alesina y Perotti (1996), quienes investigaron la situación de 71 países en desarrollo entre 1960 y 1985, y que defiende que la desigualdad en la renta aumenta el descontento de la sociedad, lo que a su vez impulsa la inestabilidad socio-política, medida en el número de muertes en disturbios internos y asesinatos y los golpes de Estado. Otro economista que apoya esta tesis es Ontiveros (2011), quien dice que la desigualdad excesiva es una de las principales causas de conflictos, no sólo en el caso de Colombia, sino también en otras partes del mundo, como el norte de África y Oriente Medio.

La economía de Colombia generalmente ha experimentado crecimientos positivos, incluso durante épocas de gran violencia (por poner un ejemplo, en el período de gran violencia que comienza a partir de 1984, y hasta más de 10 años después, se dan crecimientos de entre un 2% y un 6% del PIB, según datos del Banco Mundial). Sin embargo, como observan Nafziger y Auvinen (2002), una elevada desigualdad puede contribuir al empobrecimiento o privación absoluta de una gran parte de la población, incluso en momentos de crecimiento económico. Añaden que el efecto en la población más pobre de la demostración de altos niveles relativos de consumo por parte de la población más rica, aumenta la percepción de pobreza o privación, incluso aunque esta no fuese tan grande. Este fenómeno es conocido por Gómez (2001) como la “hipótesis de la privación relativa”. Así, el riesgo de confrontaciones políticas aumenta con el aumento de las disparidades en riqueza, clase o incluso entre regiones, que es exactamente el caso de Colombia. Algunos de los factores de tipo regional que pueden llevar a situaciones de conflicto son las diferencias en educación, empleo o renta, que dejan de lado a una minoría. Por último, los autores explican que la emergencia de conflictos es mayor en los casos en los que la población menos aventajada puede identificar a aquellos que han causado la situación.

Lógicamente, es complicado establecer una relación causal directa entre desigualdad y los conflictos violentos, ya que no siempre se da el caso de que la desigualdad cause conflictos civiles, y que existen muchos otros factores a considerar. Esto es lo que sugiere Cramer (2003) al decir que “la desigualdad económica es importante para explicar conflictos civiles, pero que los vínculos no son tan directos como se supone comúnmente”. Considera importante diferenciar entre distintos tipos de desigualdad, cómo ésta es manejada por la sociedad, y los mecanismos de transmisión que conducen de una sociedad desigual pacífica a una en conflicto.

5. Costes económicos y sociales del conflicto en Colombia

En este apartado se realiza un análisis de los principales costes del conflicto en Colombia, tanto desde el punto de vista macroeconómico como desde el punto de vista del desarrollo humano, el cual, como vamos a ver también tiene efectos cuantificables económicamente.

5.1. Efectos macroeconómicos

Una primera aproximación a los costes de la violencia en Colombia, se puede realizar analizando las consecuencias en el marco de la economía del país. Existen numerosas estimaciones de los costes de un conflicto en términos macroeconómicos. A pesar de que hay claras discrepancias en cuanto a la magnitud de los costes y a la relación entre violencia y economía, no cabe duda del enorme impacto que ha tenido el conflicto colombiano en la economía del país, tanto directa como indirectamente.

5.1.1. Crecimiento económico

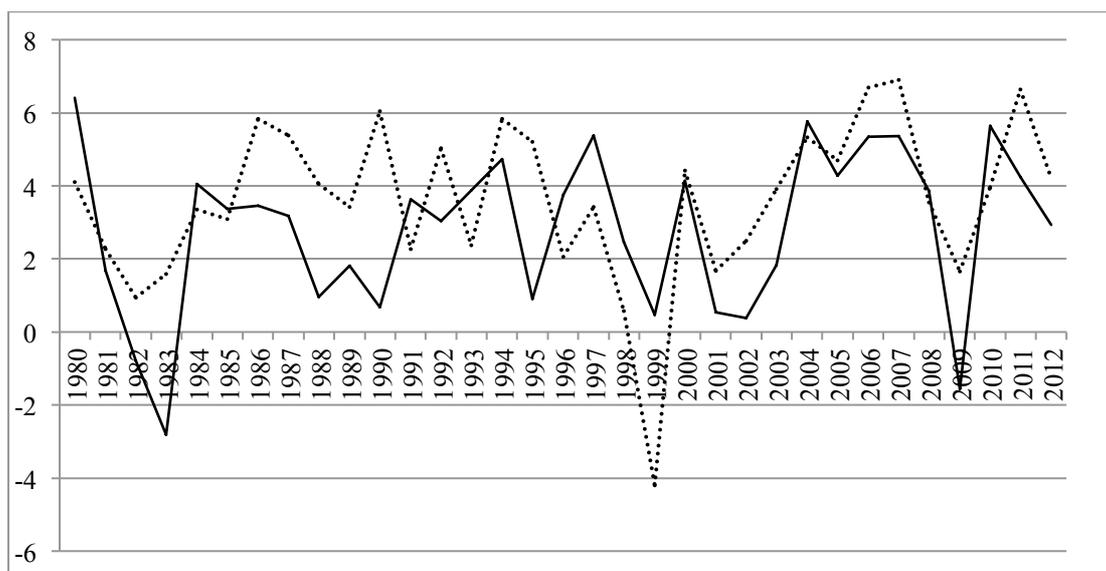
Como hemos visto, el conflicto armado en Colombia no es nuevo, sino que es uno de los conflictos de más duración del mundo (aproximadamente desde 1950 hasta hoy), y uno de los de mayor intensidad. De acuerdo con Echeverry, Salazar y Navas (2001), la larga duración del conflicto implica una menor pérdida anual de crecimiento, la cual tiene, sin embargo, un efecto multiplicador, haciendo que los costes a largo plazo sean mucho mayores que la relativamente pequeña pérdida anual. Una de las razones por las cuales un conflicto de más larga duración tiene efectos menores es que, en palabras de Nafzinger y Auvinen (2002), “la población se adapta a un nivel ‘aceptable’ de violencia a través de su experiencia prolongada”.

Podemos analizar los costes en términos de crecimiento económico, en primer lugar comparando la evolución económica de Colombia en épocas de gran conflicto económico con la evolución económica de la región. En el citado estudio de Echeverry, Salazar y Navas (2001), se comprueba que los países con conflicto soportan menores tasas de crecimiento. En el caso de Colombia, como vimos, si que

hubo crecimiento en el período 1984-1998, incluso mayor que el de la región. Esto se debe a que se trata de un conflicto de larga duración en el que el coste se calcula en tasa de crecimiento por año, y en el cual el coste acumulado va a ser mayor. Esto se puede comprobar comparando la tasa media de crecimiento durante el conflicto con la tasa media de crecimiento a largo plazo: aquí ya vemos una pérdida acumulada de crecimiento en ese período del 6%. Otros autores (Badel, 1999 y Cárdenas, 2000) estiman la pérdida en el crecimiento en cifras diferentes, debido a la dificultad en la obtención de datos fiables y las distintas maneras de cálculo. Entre ellos, el PNUD (2003) indica que los costes directos del conflicto alcanzan el 2% del PIB anual. Este daño afecta además al crecimiento futuro, por la destrucción de infraestructura física, el sacrificio del capital humano y la falta de inversión nacional y extranjera. Es decir, “la guerra disminuye tanto la disponibilidad como la productividad de los factores, variables de las cuales depende el ritmo de crecimiento del PIB” (PNUD, 2003). A pesar de las discrepancias en las cifras, todos coinciden, sin embargo, en el enorme impacto que, directa o indirectamente, tiene el conflicto armado en el crecimiento económico del país.

Como se observa en el gráfico siguiente, donde se compara el crecimiento del PIB de Colombia (línea discontinua) con el de Latinoamérica y el Caribe (línea continua), éste ha sido generalmente positivo, y bastante elevado. Además, se puede observar que, como se explicó, el crecimiento entre 1984 y 1988, época de gran violencia, fue bastante alto y, en general, superior a la media de la región. El brusco descenso en el crecimiento después de estos años, mucho mayor al de la región, puede ser consecuencia de los desequilibrios acumulados, y el efecto multiplicador del que hablábamos.

Gráfico n° 2: Evolución del PIB Colombia y Latinoamérica



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial (2014)

5.1.2. Inversión

En segundo lugar se puede identificar una relación entre el conflicto y la inversión. Alesina y Pierotti (1996) investigan como la inestabilidad política reduce la propensión a invertir. Esto se debe principalmente a la relación de la inestabilidad con la incertidumbre, ya que en momentos de conflicto aumenta la posibilidad de una caída del Gobierno (incertidumbre en la política económica o protección de derechos de propiedad), de interrupción de la actividad productiva o incluso del abandono de la ley. En un marco económico incierto, los inversores prefieren posponer sus proyectos, invertir en otros países (fuga de capitales) o simplemente consumir más.

A pesar de que, como venimos viendo, es muy difícil la obtención de cifras fiables, en cuanto al tamaño del impacto, un ejemplo a modo de ilustración sería el ofrecido por Echeverry, Salazar y Navas (2001), quienes indican que la disminución en inversión privada, en comparación al valor que se obtendría a largo plazo es de 0,53% del PIB. Parra (1998) concluye que la influencia negativa de la violencia en la inversión se manifiesta en que una disminución del 75% en la tasa de homicidios, prácticamente duplicaría la inversión privada como porcentaje del PIB.

5.1.3. Gasto público

Muchos estudios relacionan las épocas de conflicto armado con un aumento de intensidad del gasto público militar, lo que por un lado conlleva una reasignación de recursos hacia gasto en defensa y justicia, que reducen el crecimiento económico, y, en segundo lugar, permitiría un menor gasto en importantes partidas como educación o salud. Este es el punto de vista de Nafzinger y Aufvinen (2002): los gobiernos, en situaciones de conflicto, suelen aumentar el gasto militar para evitar amenazas de la oposición política, lo que tiene un impacto socio-económico enorme para la población. Según un informe de Isaza y Campos (2005), el gasto total militar, incluyendo aspectos encubiertos por las autoridades como las pensiones militares, es igual a la suma del gasto en sanidad, educación y protección medioambiental.

Según datos del Banco Mundial (2014), el gasto militar en Colombia hasta los años 90 fue de tan solo un 2% del PIB, y a partir de ahí fue creciendo hasta llegar a un 3,3% del PIB en 2012, muy por encima de la media de América Latina, donde el gasto fue de 1,3% del PIB. De acuerdo con Kalmanóvitz (2011), a este gasto público en seguridad hay que añadirle el gasto privado -asesorías, control de riesgos, blindaje de vehículos, escoltas, etc.- que supone alrededor de 5.800 millones de dólares anuales, convirtiendo a Colombia en uno de los estados más militarizados del mundo, solo superado por Israel y Burundi.

López (2009) sostiene que el aumento del gasto en defensa y seguridad puede generar obviamente un efecto positivo en el crecimiento a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, esta no es una solución sostenible, y sobre todo, no es una que genere mejores condiciones de vida para la población ya que este aumento en el gasto es financiado normalmente mediante un aumento de los impuestos o disminución de gastos en otras partidas más beneficiosas para la sociedad.

5.1.4. Productividad

Otro factor que se ve perjudicado por el conflicto en Colombia es la productividad, la cual desciende en épocas convulsas. Hasta 1980 las ganancias de productividad añadían un punto porcentual al crecimiento del PIB per cápita, mientras que a partir

de ese año, en el que comienza la violencia relacionada con el narcotráfico, las pérdidas en productividad restaron esa misma cantidad al crecimiento, según un análisis de Cárdenas (2001). El descenso en la productividad colombiana a partir de 1980 se debió al aumento de la criminalidad en esas fechas, la cual “desvió el capital y la mano de obra hacia actividades improductivas”. Además, este descenso en productividad explica la desaceleración en el crecimiento del PIB a partir de 1980, estableciendo así una relación entre crimen y crecimiento económico.

El estudio realizado en 1996 por Nuñez, Rodríguez y Sánchez, incorpora la tasa de homicidios como uno de los elementos determinantes de la productividad, si bien afirma no ser concluyente, a pesar de que ha evolucionado de manera paralela a los ciclos de violencia en el país: crecimiento superior al 1% anual en el período 1950-67, fuerte aumento (2,09%) entre 1967-74 y fuerte reducción a partir del año 1974 y hasta 1994, último año analizado (presentando un valor negativo de -0,16% en el intervalo 1980-85).

5.1.5. Otros factores

Colombia es un país con una muy buena dotación en recursos naturales, no solo en comparación con América Latina sino también a escala mundial, ya que posee el 10% de las especies vegetales y animales del mundo, lo que convierte a su superficie en el segundo ecosistema más grande del mundo, además de una de las tierras más fértiles de América del Sur. Asimismo, Colombia cuenta con una gran riqueza en recursos minerales y petrolíferos, y es el primer exportador mundial de esmeraldas, el segundo de café y flores y el cuarto de carbón. Como se explica exhaustivamente en la investigación de Leiteritz, Nasi y Rettberg (2009), la relación entre recursos naturales legales y conflictos en Colombia puede encuadrarse en tres categorías:

1. Relación directa: aquella en que la principal motivación de los grupos ilegales es apoderarse de los recursos y de los beneficios a ellos asociados o bien extorsionar a los propietarios o a quienes los explotaban. Sería el caso del plátano (banano), oro, petróleo y aceite de palma.
2. Relación indirecta: aquella en que si bien se aprovechan de los recursos, éstos no han sido la motivación para la actuación de los grupos ilegales en la zona.

Sería el caso de las actividades mineras del ferroníquel y la extracción de esmeraldas hasta 1990.

3. Aislamiento: aquella en que se ha conseguido evitar la penetración de los grupos ilegales en la explotación de determinados recursos. Sería el caso del café y las flores, y la extracción de esmeraldas a partir de 1990.

Un rasgo esencial de cualquier conflicto armado es la destrucción de una gran cantidad de activos productivos e infraestructuras. Según el informe del PNUD (2003), las guerrillas destruyen principalmente puentes, torres de energía y de comunicaciones, vías, acueductos y oleoductos, lo que supone para el Estado una pérdida de capital económico y humano para protegerlas. Conforme se indica en un estudio de Acevedo (2012), citando fuentes del Banco Mundial, en 2012 Colombia presentaba significativos retrasos respecto a la media de América Latina en todos los ratios relativos a vías de comunicación terrestres: vías pavimentadas por cada 100 km² (1,2 km frente a 2,5 km de media continental) y vías férreas por cada 100 km² (0,1 km vs. 0,5 km). El mismo estudio concluye que Colombia necesitará invertir cerca del 8% del PIB para recuperar el atraso en infraestructuras terrestres. Acevedo (2012) ejemplifica el deterioro de las infraestructuras del país en los desproporcionados incrementos de coste que presentan algunas actividades, como puede ser el transporte de un barril de crudo (triplica al coste de producción de ese mismo barril) o el envío de un contenedor entre la capital (Bogotá) y Cartagena de Indias, que triplica al coste entre ésta última y Shanghái (China). Esto tiene un reflejo directo en el desarrollo, una vez que reduce la competitividad de las empresas instaladas en Colombia.

5.2. Efectos sociales

Más allá de las cifras económicas, es en los datos relacionados con lo cotidiano en donde podemos comprobar el devastador efecto que tiene el conflicto armado en el desarrollo humano de un país: pérdidas en capital humano, físico y social y en el bienestar de la población son costes muy importantes a tener en cuenta en situaciones de violencia. Un crecimiento económico es una buena noticia sólo si viene

acompañado por un aumento de la calidad de vida de las personas (cohesión social y territorial).

5.2.1. Aumento de la tasa de homicidios

Para empezar, un indicador muy importante del nivel de vida es la seguridad y esperanza de vida. Colombia tiene una de las mayores tasas de homicidios de América del Sur: según el informe ‘Global Burden of Armed Violence’ (2011), Colombia es el quinto país con mayor número de muertes violentas por cada cien mil habitantes por año entre 2004 y 2009, por detrás de El Salvador, Iraq, Jamaica y Honduras, con una cifra de alrededor del 35 por cien mil. La cifra del Banco Mundial para el 2011 es de 33,2, y a pesar de que ha descendido mucho con respecto a las épocas más violentas del país, cuando superaba los 100 homicidios por cien mil habitantes, sigue siendo muy alta. Si corregimos el IDH de Colombia por la tasa de homicidios, el país bajaría muchos puestos en la clasificación. A falta de datos más modernos, en 2003 Colombia pasa del puesto 46 al 60, si se corrige por homicidios (PNUD 2003). Esto supone una visión muy clara de cómo el conflicto afecta al desarrollo humano, en el primer factor, la esperanza de vida. De hecho, de acuerdo con los datos del Banco Mundial, la esperanza de vida de los hombres es más de 7 años menor que la de las mujeres, cuando lo normal sería una diferencia de 4 años, sin embargo, la mayor mortalidad de los hombres en el conflicto aumenta la brecha.

Además, conviene mencionar que, a pesar de que los organismos internacionales clasifican al conflicto colombiano como uno de intensidad media, los datos ofrecidos por las estadísticas oficiales son mucho menores que los datos reales, dada la baja calidad de la información (Organización Mundial de la Salud, 2004). Entre otras cosas no tienen en cuenta la gran diferencia entre regiones: Cali es la región con más homicidios (la tasa es de 92), seguida de Medellín (50), coincidiendo con las regiones de donde provienen los mayores cárteles de narcotráfico (El País, 2013). Otros factores que no se tienen en cuenta son las posibles muertes provocadas por violencia ordinaria, en comparación con las provocadas por el conflicto armado. Y obviamente es imposible medir el número de muertes que resultan de la propagación de una ‘cultura del crimen’.

A pesar de la difícil medición en la pérdida de vidas humanas, existen otras claras consecuencias perjudiciales en la misma línea. El informe del PNUD (2003) menciona algunas de ellas: deterioro de la salud física y mental, sobrecarga de trabajo en los hospitales (menos espacio para encargarse de otras enfermedades), e incluso la degradación del sector salud, debido a asesinatos del personal o robos.

5.2.2 Educación

Siguiendo con el segundo factor determinante del IDH de un país, la educación, el informe del PNUD del 2003 enumera ciertas razones por las cuales el conflicto es muy nocivo para su desarrollo. En primer lugar, muchos niños y jóvenes no van al colegio por diversas razones: porque éste fue destruido, porque los profesores son asesinados o huyen, por el reclutamiento de los niños por parte de grupos armados, porque su familia fue desplazada o no puede pagar la educación, o, como vimos antes, porque el presupuesto del sector educativo se desvía ahora a gastos militares, entre otras.

En segundo lugar, la tasa de abandono escolar aumenta en las regiones con presencia de grupos armados (guerrilla y paramilitares), y aún más si ambos actores actúan en la región. Los datos ofrecidos por el informe del PNUD son de 7,72% en zonas sin conflicto y 9,84% en las zonas más conflictivas. Los datos actuales de abandono escolar ofrecidos por el Ministerio de Educación Nacional (2012) son de 4,53% en 2011, lo que indica un descenso bastante acentuado en los últimos años. En cuanto al abandono a nivel universitario este es sin duda más preocupante, un 45,3% de los estudiantes no terminan la educación superior. Sin embargo, a falta de datos, es difícil establecer una relación entre esta cifra y el conflicto.

Por último, las elevadas tasas de criminalidad explican la disminución en la inversión en capital humano (Gómez, 2001), ya que los jóvenes esperan obtener mayores ingresos en las actividades ilícitas, debido a la alta rentabilidad de estas, y al alto paro juvenil que vimos en el capítulo anterior. En definitiva, es indudable el efecto que tiene la criminalidad en la degradación del capital humano, y en consecuencia, en el nivel de vida de la población, especialmente en los jóvenes que no pueden desarrollar plenamente sus capacidades. A esto se le añade un daño imposible de medir, que

consiste en la difusión de la cultura de la violencia, por la cual la población aprende que la violencia es la única solución a los conflictos y dificulta la participación social en la búsqueda de soluciones pacíficas colectivas a la guerra interna, deteriorando el marco institucional.

5.2.3. Desplazamientos forzados

Es importante mencionar los desplazamientos forzados ya que constituye el mayor grupo de víctimas del conflicto y, por tanto una de las más graves violaciones en derechos humanos. Según un artículo de Durán (2013), Colombia es el país con más desplazados internos del mundo, con cifras para 2012 de entre 4,9 y 5,9 millones de personas, unas 230.000 en 2012, representando alrededor de un 90% de todos los desplazamientos internos en América del Sur.

La relación entre desplazamientos forzados y el conflicto armado es bastante sencilla: por una parte los actores del conflicto buscan la dominación de territorios, tanto en relación a las tierras como a su población, de forma a mantener posiciones de poder. Esta situación afecta a la vida diaria de miles de personas en Colombia. En segundo lugar el desplazamiento puede ser masivo (el que afecta a comunidades enteras) o más puntual, por ejemplo de familias, y se puede deber a amenazas, reclutamiento forzoso o miedo de la población (Bohórquez, Centeno, Durán y Parra, 2007).

Rubio (1997) citado por Giménez y Ospina (2009), estima que los desplazamientos forzados tienen un impacto directo en el sector agrícola (por el abandono de tierras cultivadas en las zonas más conflictivas), así como en un importante aumento del desempleo en las zonas urbanas. Por tanto, influye en la degradación del capital humano del país.

5.2.4. Otros factores

Junto con los costes sociales abordados, que son los más significativos en el caso de Colombia, existen muchos otros que merece la pena mencionar ya que suponen violaciones de los derechos humanos e impiden el desarrollo del país. Aunque no se

vaya a profundizar mucho, no podemos despreciar algunos de ellos, como los que se detallan a continuación:

- Las desapariciones forzadas han ascendido a 700 en los últimos cuatro años, lo que supone que desaparece una persona cada dos días. Según el Centro de Memoria Histórica (2014), en los últimos 40 años han desaparecido unas 90.000 personas.
- Las detenciones arbitrarias ocurren cuando las instituciones de justicia se ponen al servicio de grupos armados. Según la Comisión Colombiana de Juristas (2007), entre 2002 y 2006 se registraron un promedio de cinco detenciones arbitrarias por día.
- Los secuestros se realizan mayoritariamente por las FARC y con motivos económicos. En apartados siguientes se habla más de este fenómeno.
- Las comunidades en confinamiento, es una nueva estrategia de los movimientos paramilitares, en contraposición a los desplazamientos forzados, que en muchos casos impide a la población acceder a servicios básicos.

Además existen ciertos grupos que son particularmente vulnerables ante los conflictos, principalmente:

- Los indígenas, víctimas del racismo de la población colombiana y del Estado. Cohre (2005) estima que el 82% de los afrocolombianos viven en condiciones de pobreza, que su tasa de analfabetismo es tres veces mayor, su mortalidad infantil más que triplica a la media nacional y además representan un cuarto del total de personas desplazadas (siendo ellos sólo el 11% de la población).
- Las mujeres se hacen más vulnerables en situaciones de desplazamiento, ya que la violencia sexual, prostitución o esterilización forzadas son muy comunes en el conflicto, y se usan como forma de control simbólica de un territorio (Humanas, 2012).
- Los niños soldado: tanto las FARC y ELN, como los grupos paramilitares cuentan con niños entre sus filas. Según el Human Rights Watch (2008), se estima que puede haber unos 10.000 niños soldado en Colombia. En cuanto a las niñas, en muchos casos se ven obligadas a mantener relaciones sexuales con los combatientes.

Conviene puntualizar que todos los efectos sociales del conflicto de los que he venido hablando son susceptibles de medición económica. En primer lugar, existen varias formas cálculo del coste de una vida humana, pero además la pérdida de vidas supone una gran pérdida en capital humano, con el consiguiente descenso de la competitividad del país, y el miedo que surge de ellas limita la inversión que se realiza tanto interior como exterior. Lo mismo ocurre con la educación, hemos visto que se reducen los incentivos a invertir en capital humano, desciende la productividad y, otra vez, la competitividad nacionales. Los desplazamientos forzados provocan a su vez un descenso de productividad de las tierras y su apropiación por parte de grupos armados, los cuales no van a aumentar la producción del país sino que absorben sus ganancias o se la llevan al extranjero. Además obviamente los desplazamientos suponen pérdidas en capital humano.

Para finalizar, en palabras de Rojas Aravena (2011), “La violencia inhibe el desarrollo humano, se transforma en un obstáculo para el crecimiento y limita las oportunidades de construir sociedades, en donde la libertad posibilite una plena y efectiva legitimidad democrática. La violencia limita, disminuye y reduce las opciones para una vida mejor, aspecto central en el desarrollo humano”.

6. Motivaciones económicas de la violencia

El conflicto armado colombiano, como vimos en la introducción, tiene una enorme complejidad. A pesar de que en su comienzo las motivaciones eran mayoritariamente políticas, cada vez fueron ganando más importancia las motivaciones económicas.

Según Montenegro y Posada (1995), la principal causa del aumento del crimen en Colombia es el aumento de los incentivos económicos al crimen, asociados principalmente a la generalización del tráfico de drogas y al petróleo. Otro autor que defiende esta misma posición es Sanín (2004), quien indica que el conflicto en Colombia se trata de una “guerra codiciosa” y que existen fuertes relaciones entre los grupos armados y las actividades económicas ilícitas. Otros expertos sin embargo subrayan la importancia de las motivaciones políticas por encima de las económicas y defienden que una guerra nunca puede surgir por motivos puramente económicos (Arnson y Zartman, 2005).

De todas formas, si tenemos en cuenta la evolución de ciertos grupos que surgieron con propósitos básicamente políticos, como las FARC, y que más tarde se dedicaron también al narcotráfico, es difícil de negar que existe un criterio económico, y no solo uno político, que motiva la actuación tanto de los grupos paramilitares como de los grupos rebeldes en el conflicto armado colombiano. Además, no hay que olvidar que los grupos armados, al no formar parte del Gobierno, que obtiene su financiación de los impuestos, para poder seguir llevando a cabo sus actividades y aumentar su poder en el país necesitan obtener sus propias fuentes financiación, que van a estar en la mayor parte de los casos relacionadas con actividades ilícitas. El tráfico de drogas, por su alta rentabilidad y su enorme expansión en Colombia desde los años ochenta, se ha convertido en la solución ideal para muchos de estos grupos.

Por tanto, dejando de lado otras posibles motivaciones que no conciernen a los objetivos de este trabajo, en este capítulo voy a analizar las principales motivaciones económicas que tienen los actores de la guerra interna colombiana, y los factores que han hecho posible la existencia de los grupos armados durante un período tan largo de tiempo.

El informe del PNUD del 2003, explica que existen ciertas razones por las cuales el conflicto en Colombia no ha sido capaz de solucionarse en más de 40 años (ahora ya serían más de 50). Para empezar, el Estado es estructuralmente débil tanto en términos fiscales como en su capacidad de regular y de ejercer poder, lo que le ha imposibilitado responder a la situación de violencia durante todos estos años. En segundo lugar un país tan extenso como Colombia y con una geografía tan fragmentada formada por muchísimas provincias aisladas entre sí no va a facilitar la cohesión social ni territorial. En tercer lugar, la extensión de la ciudadanía se ha dado de forma lenta e insuficiente, sin incorporar a una gran parte de la población -esto sería la enorme desigualdad regional de la que veníamos hablando. Y por último, las élites colombianas están también muy divididas y no tienen suficiente apoyo social que les permita dirigir el país. Todos estos factores están conectados y se condicionan los unos a los otros, con el resultado de una sociedad muy diversa y pluralista, y muy propensa al conflicto, donde es muy complicado resolver los problemas colectivos.

Todas estas razones son necesarias para el desarrollo de un conflicto de tan larga duración, sin embargo la viabilidad económica es un requisito imprescindible para que los grupos armados puedan continuar en funcionamiento, especialmente pero no necesariamente, si se dan los factores anteriores. Las organizaciones armadas, como cualquier otra organización u empresa tiene gastos mínimos que tiene que cubrir para poder continuar su actividad: gastos de personal, de armamento, infraestructuras, etc. Siguiendo con el ejemplo de las empresas: estas intentan maximizar la utilización de sus recursos para seguir creciendo y no desaparecer. Para esto, por un lado, intentan bajar en la medida de lo posible sus costes, y por otro, aumentar sus ingresos, para lo cual, si es necesario, pueden diversificar sus actividades generadoras de riqueza (Goded, 2008).

6.1. Factores de reducción de costes

Vamos a analizar en primer lugar los factores que han posibilitado la reducción de costes en las actividades de los principales grupos participantes en el conflicto. El

principal es la obtención de una gran cantidad de mano de obra barata, que reduce de gran manera lo que hemos llamado sus ‘gastos de personal’. Este factor se ha posibilitado por la gran pobreza del país y el desempleo. Como vimos antes la pobreza y el desempleo inducen a la violencia, ya que las personas no se encuentran satisfechas con su nivel de vida y buscan formas de obtención de ingresos más rentables que suelen coincidir con las actividades ilícitas. Pues bien, estas situaciones también facilitan la propagación de la violencia ya que bajan los costes que tienen que soportar los grupos armados, en una simple regla de oferta y demanda. Además, en una sociedad pobre y desigual muchas personas están desesperadas por obtener ingresos, simplemente para poder alimentarse y llevar a cabo sus proyectos de vida, y van a encontrar menos obstáculos morales a involucrarse en actividades ilegales que lo que ocurriría en sociedades con índices muy bajos de pobreza y de desempleo, donde es muy difícil y caro reclutar al número de personas necesarias para mantener ejércitos (Garrido, 2001).

El segundo factor que posibilita bajar los costes es el acceso a armamento a bajo precio. Según Collier (2003), al producirse en Europa Oriental un cambio de régimen, se hizo posible vender los excesos de material militar a grupos armados por todo el mundo a precios muy asequibles, hecho del cual se aprovecharon los insurgentes colombianos. En un país donde es ilegal la venta de armas a grupos como las FARC, estos consiguen acceder a ellas mediante lo que Stewart (2013) llama “acuerdo de armas gris”. Un ejemplo de ello fue la compra legal de miles de armas a Alemania del Este por parte de Perú, supuestamente para ser utilizadas por militantes peruanos, pero que sin embargo acabaron desviándose a Colombia para su uso por parte de las FARC.

De acuerdo con lo anterior, cuando un grupo armado posee una gran cantidad de personas dispuestas a sumarse a sus filas y es capaz de obtener armas de países alrededor del mundo a muy bajos precios, ha establecido las bases de su negocio a un precio muy bajo, y va a poder centrarse en la financiación de sus actividades para aumentar su poder.

6.2. Fuentes de financiación

Para los grupos armados, obtener fuentes de financiación de alta rentabilidad y bajo riesgo¹ es una de sus prioridades. En 2012, se estima que las FARC, el principal grupo activo hoy en Colombia, obtenía el 30% de sus ingresos del narcotráfico, el 20% de extorsiones relacionadas con la actividad minera y energética, el 30% de extorsiones por secuestros, el 15% de la economía legal y el 5% restante de otras fuentes (Montero, 2012). Como vamos a ver a continuación, en los últimos años el tráfico de droga ha perdido peso, dejando paso a las actividades mineras.

6.2.1. Narcotráfico

El narcotráfico es la actividad ilegal que más efectos nocivos ha tenido en Colombia, ya que el país es uno de los mayores productores de hoja de coca del mundo, de ahí que sea en la que el Gobierno invierte más esfuerzo en erradicar. El tráfico de droga, sin embargo, no lleva mucho tiempo en el país sino que comenzó alrededor de los años ochenta, principalmente a través de la producción de marihuana que luego se diversificó hacia la cocaína. A inicios de los años noventa se asiste a una pequeña reactivación de la producción de marihuana y a significativos aumentos en la heroína.

El aumento de la demanda y los beneficios asociados dieron lugar a la aparición y posterior expansión de grandes cárteles que procuraban el control del negocio. Los más importantes fueron: el Cártel de Medellín (liderado por Pablo Escobar, abatido en 1993, lo que propició su desarticulación) y el Cártel de Cali, que tomó inicialmente el relevo pero fue prácticamente desarticulado a finales de los noventa. Con menor proyección mediática, pero igualmente importante, hay que destacar el Cártel del Norte del Valle y el Cártel de la Costa Atlántica.

Hubo varios intentos por parte del Gobierno colombiano (con apoyo material y económico exterior, principalmente de Estados Unidos) por desarrollar planes de

¹ Existen riesgos relacionados con políticas de seguridad del Gobierno que dificultan las actividades de financiación, como por ejemplo, las campañas masivas antidroga.

combate al tráfico de drogas. El más relevante fue el fracasado Plan Colombia implementado en el período 1999-2000.

A pesar de estos intentos de erradicación, el papel de Colombia sigue siendo fundamental en el mercado mundial (no sólo a nivel de producción, sino también en el procesamiento y transformación y en el control de las redes de distribución). Además, según la ONU la mayoría de las ganancias provenientes del tráfico de cocaína en Colombia no se quedan en el país sino que van a parar a los países ricos de destino (Cable News Network -CNN, 2010).

En la actualidad el narcotráfico está perdiendo peso para dar paso a actividades extorsivas en relación con la extracción de petróleo y minerales, mucho más ‘seguras’ para los grupos armados. Según Luxner (2014) en 2005 Colombia exportaba el 90% de las hojas de coca en el mundo, mientras que en la actualidad solo exporta el 44%, por un lado debido a los esfuerzos del gobierno colombiano y por otro por el aumento del tráfico de esta sustancia en Perú (que hoy en día exporta una cantidad similar a la de Colombia). Añade que, entre 2011 y 2012, el área total de cultivo de coca disminuyó en un 25%, y el total de coca producida disminuyó de 345 a 309 toneladas métricas.

La guerrilla de las FARC comenzó su relación con el narcotráfico en la década de 1980, inicialmente mediante el cobro de un denominado “impuesto revolucionario” a los agentes que operaban en el territorio controlado por la guerrilla, para posteriormente pasar a actuar directamente. Actualmente se estima que la mayor parte de la producción de cocaína está controlada por las FARC, para las cuales supone la mayor parte de sus ingresos, estimado en unos 300 millones de dólares anuales (Luxner, 2014). Las negociaciones de paz que se están llevando a cabo en estos momentos pretenden terminar con este negocio, pero si consideramos la magnitud de ingresos que supone para los grupos armados comprendemos el por qué de que vayan tan lentas.

6.2.2. Extorsión

Una fuente de ingresos que gana cada vez más importancia es la extorsión, que depende mucho de las exportaciones de commodities². ¿A qué se debe esto? Según Collier (2000) las actividades primarias de exportación de commodities son de las que más se pueden aprovechar los grupos armados para obtener sus ingresos. Esto sucede porque su producción se basa mayoritariamente en activos inmuebles y de larga duración. Así, cuando un pozo minero ha sido construido o cuando se han plantado árboles de café, vale la pena explotarlos a pesar de tener que renunciar a una gran parte de los beneficios, que pasan a los grupos armados, quienes les amenazan con destruir sus propiedades. Además, los grupos armados controlan ciertos puntos en las vías de exportación, en los cuales cobran tributos mediante el uso de amenazas.

Por tanto, esta práctica de la extorsión tiene su mayor exponente hoy en día en la actividad minera y energética, la cual ha crecido significativamente en los últimos años: en 2009 este sector representó el 6,4% del PIB de Colombia y más de la mitad de sus exportaciones (Bonilla, 2011). Principalmente, Colombia es uno de los mayores productores en Latinoamérica de petróleo, carbón, oro, plata y ferróníquel. Esto, junto con las expectativas en cuanto a la extracción de muchos otros minerales ha atraído a empresas multinacionales a invertir en el país, sin embargo, lo que en un principio parece una buena noticia, no lo es tanto si consideramos que los grupos armados han venido obteniendo una gran parte de sus ingresos de actividades mineras y petroleras.

Para analizar de dónde provienen exactamente los ingresos de los grupos armados en relación con las actividades de extracción voy a seguir el trabajo de Massé y Camargo (2012). Para empezar, la razón del renovado interés en estas actividades está relacionada con la enorme subida en los últimos diez años de los precios de los minerales y del petróleo en los mercados internacionales: entre 2002 y 2012, el oro pasó de 300 a más de 1.500 dólares, el carbón prácticamente duplicó su precio y el petróleo, a pesar de fluctuar más, lo cuadruplicó. Por otro lado, los precios impulsaron

² Bienes que tienen un valor o utilidad y muy poca diferenciación, generalmente materias primas o bienes primarios.

la búsqueda de nuevos yacimientos y minerales explotables. Teniendo esto como fundamento, la actividad de los grupos armados se enfocó en tres ámbitos:

- El primero, la explotación ilegal de oro, consistente en la presión ejercida sobre mineros artesanales o simplemente la explotación directa ilegal, supuso un complemento muy rentable a los cultivos ilícitos: cerca del 50% de las minas en el país son ilegales y están dominadas por los grupos armados, lo que explica que el mapa de las actividades mineras en Colombia coincida generalmente con las zonas de actuación de estos grupos. Las FARC es el grupo que más presencia tiene en el sector y según la policía obtiene alrededor de un 20% de sus recursos de la explotación ilegal de oro.

Uno de los atractivos del oro, además de su alto precio es que gracias a que es muy difícil de rastrear, existe la posibilidad de lavado de dinero mediante compras de oro con dinero del narcotráfico, para luego reportarlo como si hubiese sido obtenido de ciertas minas de baja producción. Para facilitar la venta posterior del metal, muchos grupos tienen sus propias oficinas de venta o se relacionan con comerciantes legales. Otra de sus ventajas es que tanto la producción como la comercialización del oro es mucho menos arriesgada que la de cocaína, que esta está mucho más controlada por la lucha del Gobierno contra el narcotráfico.

- El segundo se trata de la extorsión a las grandes empresas del sector extractivo. Como se ha señalado anteriormente, cada vez existe un mayor número de empresas actuando en este sector: la inversión extranjera directa en el sector minero y petrolero suponía en el año 2000 unos 750 millones de dólares, mientras que en 2009 alcanzó alrededor de 5.400 millones (más del 30% de la inversión extranjera directa en Colombia). Para los grupos armados esto supone un aumento de los incentivos a estas extorsiones y debido a las crecientes ganancias de estas empresas, unos objetivos mucho más atractivos. Algunos ejemplos muy conocidos de empresas víctimas de extorsión fueron la alemana Mannesman, la americana Drummond o la inglesa BP.

A pesar de que en 2011 el entonces presidente Juan Manuel Santos prohibió a las empresas ceder ante la extorsión bajo amenaza de expulsión del país, estas prácticas siguen llevándose a cabo. Consisten principalmente en la imposición del pago de una suma, que varía según las empresas y actividades, a cambio de protección para que las empresas operen sin problemas o simplemente de la autorización de explotar en zonas controladas por los grupos armados. También existen, aunque en menor medida, casos de secuestros de empleados o la destrucción de infraestructuras.

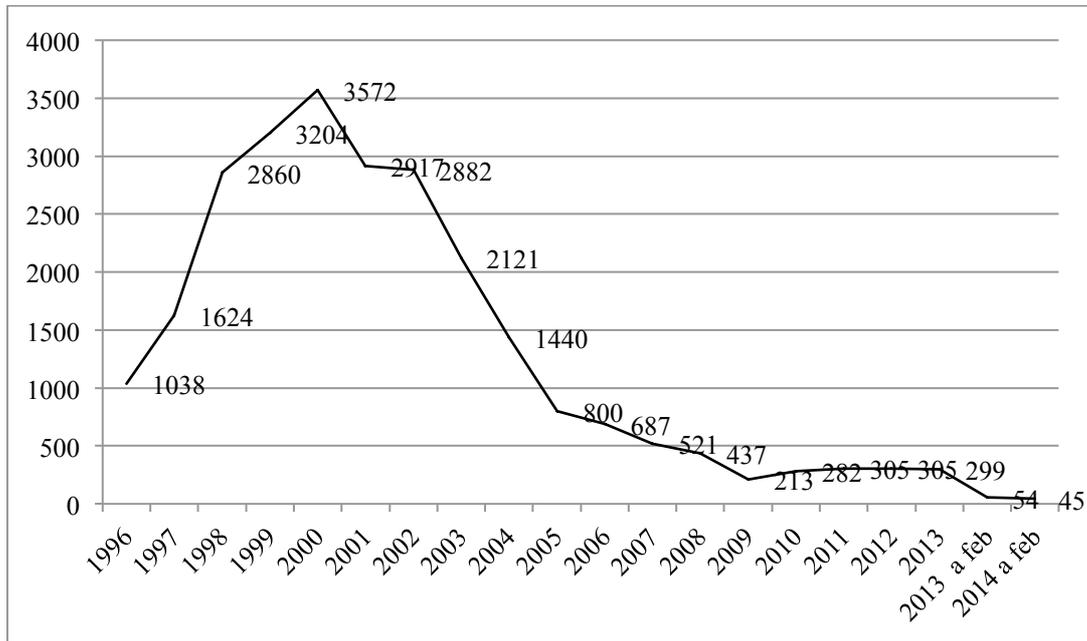
Sin duda el sector más afectado por el conflicto es el petrolero. Un estudio reciente, citado por El Colombiano (2014), indica que en 2013 hubo un aumento del 38% en ataques a este sector, pasando de 142 casos en 2012 a 193 en 2013, de los cuales la mayor parte (185) fueron perpetrados por las FARC. En el caso de los secuestros, entre 2012 y 2013, 38 trabajadores petroleros fueron secuestrados, la mayoría por parte del ELN, suponiendo también un aumento respecto a años anteriores.

- En tercer lugar los actores armados obtienen regalías del sector extractivo de forma ilegal. Es decir, consiguen que alcaldes de municipios mineros o petroleros les den parte de las regalías que obtienen del Estado. Los grupos armados aprovechan el hecho de que el aumento artificial de la producción de oro aumente las regalías de los municipios, pidiéndoles parte de ellas como compensación.

6.2.3. Secuestros

Los secuestros se encuentran entre las actividades ilegales más rentables, ya que el valor obtenido es muy alto en comparación con los costes, y, sobre todo, en el caso del secuestro llevado a cabo por grupos armados, la probabilidad de condena es muy baja. El número de secuestros en los últimos años ha descendido mucho, en comparación con la época de más secuestros, alrededor del año 2000, como se puede ver en el gráfico a continuación. Sin embargo, no parece que haya disminuido el número de secuestros muy significativamente desde que las FARC anunciaron que iban a dejar de cometer secuestros a principios de 2012 (El Confidencial, 2012).

Gráfico n° 3: Evolución del número de secuestros



Fuente: Ágora Consultorías (2014)

Si es cierto que los secuestros han disminuido drásticamente en los últimos años, el porcentaje de secuestros extorsivos no ha descendido, y de hecho ha aumentado en el último año, en el cual el 53% fueron de carácter extorsivo, según datos de la Fundación País Libre (2013).

6.2.4. Economía legal

Como complemento de sus ingresos obtenidos de forma ilegal los grupos armados también realizan actividades legales, y aunque estas suponen solo una pequeña parte de sus ingresos totales, merece la pena mencionarlas brevemente. Entre las principales actividades dentro de la economía real se encuentran los negocios legales de propiedad de estos grupos, como por ejemplo cooperativas de lanchas y de taxis, supermercados, fincas y ganadería. Además obtienen ingresos de organizaciones no gubernamentales (ONG) de izquierda internacionales (Montero, 2012). Sin embargo es imposible obtener datos de la suma exacta que suponen estos negocios.

7. Conclusión: el fin del conflicto armado

7.1. El proceso de paz

Como se explicó brevemente en la introducción, en la actualidad se está llevando a cabo un proceso de paz entre las FARC (el principal grupo armado en Colombia) y el Gobierno. Ya ha habido intentos pasados de paz, como por ejemplo el Plan Colombia (año 1999-2000), para el cual Estados Unidos aportó 4.700 millones de dólares, pero que no tuvo éxito, sobre todo en su objetivo principal de erradicar el narcotráfico. Aún así logró ciertos avances al ayudar a disminuir las tasas de homicidio y de secuestros (Gould, 2007).

Las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC comenzaron oficialmente en octubre del 2012 y se basan en el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. La agenda propuesta está dividida en los siguientes puntos:

1. Política de desarrollo agrario: con el objetivo del desarrollo de todas las regiones y descenso de la desigualdad.
2. Participación política: garantiza el ejercicio de la oposición política a los nuevos partidos que surjan (por ejemplo de ex miembros de las FARC) y busca una mayor participación de todos los sectores.
3. Fin del conflicto: cese al fuego, reincorporación de las FARC a la vida civil (posible liberación de presos), fin de las organizaciones criminales, para garantizar la seguridad en el país.
4. Solución al problema de las drogas ilícitas: mediante sustitución de cultivos y prevención del consumo de drogas.
5. Víctimas: indemnización a las víctimas.

De estos puntos los que suponen un mayor problema son la participación política de las FARC y la liberación de presos, ya que las FARC no tienen el apoyo de la mayoría de la población colombiana, que opina que este grupo no se merece estos beneficios.

7.2. Conclusiones y recomendaciones

En el presente trabajo se han analizado los principales aspectos económicos y sociales del conflicto armado colombiano. Inicialmente surgido como un conflicto con base política, ha evolucionado para convertirse en un conflicto con un componente económico mucho más fuerte. Se ha examinado la situación actual del país, haciendo hincapié en sus puntos débiles y en cómo estos impulsan el crimen. Se han analizado los costes económicos y sociales del conflicto armado y los factores económicos que lo han posibilitado. A partir de todo lo estudiado y en vista del proceso de paz que está ocurriendo en estos momentos se van a intentar ofrecer en este apartado una serie de conclusiones y recomendaciones que deberían permitir que el proceso de paz tenga éxito y que ésta sea duradera.

Como vimos, Colombia no solo tiene el problema del conflicto armado, con la consiguiente violencia generalizada, sino que también es uno de los países más desiguales del mundo y presenta altas tasas de pobreza. El conflicto además tiene múltiples actores y las fuentes de violencia son muy diversas. Estos factores se refuerzan entre sí, en un círculo vicioso que hace muy difícil la salida al conflicto. La pobreza y desigualdad impulsan la violencia, la cual también hace que aumente la desigualdad y la pobreza, e impide el desarrollo humano, especialmente en las zonas más pobres. A este círculo vicioso se añade el importante problema de la corrupción, que solo complica aún más una posible solución del conflicto, ya que existen muchas partes involucradas, con intereses económicos y políticos diferentes. Pero a pesar de las dificultades, si tenemos en cuenta los altos costes, tanto económicos como sociales de la violencia, nos damos cuenta de la importancia que tiene que los diálogos de paz sean efectivos.

En primer lugar, merece la pena realizar una crítica al proceso de paz actual. Parece posible que el presidente Santos pueda llegar a conseguir la paz tan ansiada por la población, y sin embargo, el proceso de paz no tiene demasiado apoyo popular. Este punto es mucho más importante de lo que puede parecer. Si se quiere que la paz tenga éxito, eso significa no solo llegar a ella, sino conseguir que ésta sea sostenible. Para que esto sea posible es necesario involucrar a todos los grupos a los que la paz puede

afectar de forma directa o indirecta. Me parece que esto no está ocurriendo en el actual proceso, el cual prácticamente solo incluye al gobierno y las FARC. No solo deberían estar involucrados otros grupos armados como el ELN, sino también las víctimas, la población indígena, los campesinos y los grupos marginados, además de todos los partidos políticos del país. En el caso de que se consiga la desmovilización de los grupos ilegales hay que tener en cuenta que pueden surgir otros que se aprovechen del espacio que dejaron los anteriores.

Una disyuntiva que ha surgido en el actual proceso de paz es que las FARC, considerándose como representantes del pueblo, y negando la violencia cometida o cualquier relación con las drogas, están exagerando sus demandas al Gobierno, por ejemplo piden que no se aplique la justicia a algunos de sus miembros. Esta es una de las razones del bajo apoyo popular, ya que parte de la población cree que el Gobierno está actuando de forma injusta, dando demasiados beneficios a un grupo que ha exterminado a miles de personas a lo largo de su historia, y no está pensando en el pueblo. Sin embargo cabe preguntarse si existe alguna otra opción. Como ciertos miembros del Gobierno indican, es mejor que los cabecillas revolucionarios estén en el Gobierno que luchando en el campo.

De acuerdo con lo anterior una primera recomendación sería la toma de una decisión clara a este respecto, y en el caso de que se decida darles los beneficios que piden las FARC, no intentar ocultarlo y convencer al pueblo que esta solución va a beneficiar a todos y no solo al grupo armado. Para que esto sea posible, se tienen que tener en cuenta las demandas de todos los grupos mencionados anteriormente, facilitando que participen en el proceso de paz, para que después éste sea aceptado por todos y que no haya probabilidad de que surjan nuevos movimientos revolucionarios. Sin embargo, en mi opinión, se deberían poner límites a las demandas de las FARC, sobre todo hasta que no admitan su involucración en el narcotráfico, y las acciones violentas. Esto respondería a las demandas de las víctimas que exigen que los crímenes cometidos en su contra sean admitidos y resarcidos.

En segundo lugar, como ya indicamos anteriormente, debemos tener en cuenta que, como sostiene Rojas Aravena (2011) “la inseguridad en las sociedades latinoamericanas se encuentra más ligada a las debilidades del Estado que a las

propias fuerzas y actores presentes”. Como vimos, existe una clara falta de instituciones fuertes en Colombia, como por ejemplo la justicia. Si se quiere obtener el apoyo del pueblo, un primer paso sería el fortalecimiento institucional, sobre todo en el campo de la justicia, haciendo imposibles los actos de corrupción. Además, un Estado fuerte podría mantener más controlados a los grupos armados, obligándoles a aceptar la desmovilización sin demandas exageradas por su parte. Para ello es fundamental recuperar la cultura de la legalidad en la totalidad del territorio del país, sin que existan zonas en donde se perciba la ausencia del estado de derecho. Esto es especialmente importante en las zonas fronterizas.

En el estudio de Leiteritz, Nasi y Rettberg (2009) mencionado anteriormente, se recoge expresamente la necesidad de que todas las políticas públicas orientadas a la construcción de una paz duradera deben ser de ámbito nacional, pero, al mismo tiempo y como complemento, deben adaptarse a las especificidades locales y regionales, para limitar la posible vulnerabilidad institucional.

Esta es una primera aproximación para que las negociaciones sean viables, ya que solo un Estado fuerte con un sistema jurídico en el que se pueda confiar puede conseguir que toda la población participe y apoye el proceso de paz, y hacer que las partes respeten sus obligaciones. A partir de ahí, y según lo que hemos visto, existen dos principales frentes de actuación por parte del gobierno para conseguir una paz estable y duradera. Por un lado, se deben ofrecer alternativas viables al conflicto, que aumenten el bienestar general de la población y que integren tanto a las minorías como a los combatientes. Esto es lo que llamo una salida mediante desarrollo humano. Por otro lado, se debe imposibilitar el conflicto acabando con los incentivos a la violencia, como por ejemplo el acceso barato a armamento.

7.2.1. El desarrollo humano como salida del conflicto

La desigualdad entre regiones, la fragmentación del país, los numerosos grupos que participan en el conflicto, son características que han permitido que éste sea el más prolongado de América Latina. Una salida del conflicto debe ofrecer alternativas viables, que sean factibles y que incluyan a toda la población.

Por el lado de los combatientes, hemos visto que en muchos casos se dedican al negocio de la violencia más bien por necesidad, o por que no encuentran otra alternativa para ganarse la vida dignamente. Por esta razón, si se pretenden que dejen las armas, se les debe ofrecer otra manera de ganarse la vida. Además esta alternativa debería ofrecerles la misma rentabilidad que el crimen, y con rentabilidad me refiero no solo a económica sino en cuanto a reconocimiento social, y que responda a sus valores. En cuanto a los colombianos, y en especial a las minorías más pobres, también se les debe incluir en esta búsqueda de una manera de vida digna de ganarse la vida, ya que si ven que se atiende antes a las necesidades de los ex combatientes que a las suyas propias van a estar en contra de cualquier solución propuesta. Si se incluye no solo en las negociaciones, sino también en las soluciones a toda la población, existe además una posibilidad mucho menor de que surjan nuevos conflictos.

Para que esto sea posible el Gobierno debe tener como objetivo principal la disminución de la desigualdad y de la pobreza, mediante una reforma fiscal y gasto público social que permita redistribuir los recursos, entre todas las personas, y sobre todo, entre todas las regiones, reduciendo la fragmentación geográfica tan perjudicial. Además, la educación y el empleo, son esenciales para conseguir estos objetivos. Más importante que políticas relacionadas con inflación, deuda externa o similares, en estos momentos me parece esencial que el Gobierno se esfuerce por reducir al mínimo la tasa de desempleo, sobretodo la juvenil, y que se promueva la educación. Si se dan mayores tasas de empleo, es probable que aumente la inversión en educación por parte de la población y que se reduzcan las desigualdades. El gobierno podría además reducir su gasto en seguridad, por un lado para mostrar a los grupos armados que pretenden cumplir sus promesas en el marco de las negociaciones, y por otro para redirigir este gasto a inversiones que permitan un aumento del empleo.

Uno de los puntos del plan de paz actual es la reparación a las víctimas del conflicto, el cual es muy necesario si no queremos que una parte muy importante de la población esté descontenta. El Estado no ha sido capaz de prevenir los crímenes realizados contra millones de personas en Colombia, por lo que es su obligación al menos repararlos. Las personas desplazadas son las que suponen un mayor problema,

pero de las que no se deben olvidar, siendo necesario que se les permita volver a sus tierras y retomar una vida digna.

7.2.2. Eliminación de incentivos al conflicto

Es posible, aunque difícil, que se llegue a una situación de paz y desmovilización de todos los grupos armados. ¿Qué impide entonces que otros grupos se organicen y apropien de los negocios que éstos dejaron atrás? En Colombia ya ocurrieron situaciones parecidas, como por ejemplo con la desmovilización de los cárteles de droga, los grupos guerrilleros y paramilitares tomaron el control del narcotráfico. Es tarea del Gobierno hacer que esta situación sea muy improbable, y una de las maneras es eliminando los incentivos, principalmente económicos, al conflicto.

En el apartado anterior ya vimos ejemplos de actuaciones que disminuirían los incentivos a la violencia, como la oferta de alternativas para ganarse la vida a los combatientes desmovilizados. Pero esto no es suficiente, ya que los negocios ilegales suelen ofrecer una mayor rentabilidad económica, y la codicia podría impulsar la creación de nuevos grupos insurgentes.

Para evitar esta situación se debe por un lado aumentar los costes de la violencia, aumentando el empleo, con lo que la mano de obra se encarecería, y controlando el flujo de armas ilegal al país. En este proceso de paz ya se está colaborando con otros países como Noruega, y esta cooperación internacional sería esencial para poder impedir la oferta de armas a bajo precio en el mercado negro. Por otro lado se debería reducir la rentabilidad de los negocios ilegales como el narcotráfico o la minería. En la actualidad se están llevando a cabo muchos esfuerzos por terminar con el narcotráfico, principalmente por influencia estadounidense. En mi opinión no se le está dando tanta importancia al tema de la extorsión y la minería ilegal, que cada vez tienen más peso en la financiación de los grupos armados.

7.2.3. Observaciones finales

En base a la investigación realizada se han obtenido una serie de conclusiones y recomendaciones relevantes al actual proceso de paz. El proceso de paz, sin embargo,

aun está lejos de su fin, por lo que se debería acompañar su desarrollo para verificar si alguna de las actuaciones del Gobierno coinciden con las recomendaciones ofrecidas por este trabajo, y en su caso, el resultado de las mismas. Además una investigación similar podría aplicarse a países con situaciones parecidas a la de Colombia, como por ejemplo México o Perú, los cuales tienen altos niveles de criminalidad y también están muy relacionados con el tráfico de droga. Sería interesante realizar un estudio del ámbito económico del conflicto en estos países, y comprobar si las causas y consecuencias son similares a las de Colombia, de forma que las recomendaciones presentadas pudiesen ser aplicadas en dichos países para disminuir la violencia.

Las principales limitaciones del trabajo son la dificultad para obtener cifras fiables en aspectos relacionados con el crimen en Colombia, como por ejemplo, en las tasas de homicidios o de secuestros. Además, al investigar las dimensiones económicas globales de un conflicto tan complejo como el colombiano, es imposible llegar a un nivel muy alto de detalle, y ha sido necesario centrarse siempre en los principales puntos. A pesar de estas limitaciones me parece que se han podido identificar las principales dimensiones económicas que afectan o que se ven afectadas de alguna manera por el conflicto armado, y que a partir de ellas se ha podido realizar una serie de recomendaciones de relevancia para los diálogos de paz actuales.

Bibliografía

- ACEVEDO, L. (2012). *Infraestructura de transporte en Colombia: ¿luz al final del túnel?* Fedesarrollo: Cámara Colombiana de Infraestructura.
- ALESINA, A. Y PEROTTI, R. (1996). *Income Distribution, Political Instability, and Investment*. *European Economic Review*, 40, 12-28.
- ARNSON, C. J. Y ZARTMAN, I. W (2005). *Rethinking the Economics of War: The Intersection of Need, Creed, and Greed*. London: Johns Hopkins University. 6-27.
- BADEL, M. (1999) *La violencia de los años noventa en Colombia: su evolución en las grandes ciudades y costos económicos directos*. Departamento Nacional de Planeación, Colombia.
- BOHÓRQUEZ, V., CENTENO, A. R., DURÁN, D. A. Y PARRA, J. (2007). *Desplazamiento Forzado en Colombia. Derechos, acceso a la justicia y reparaciones*. ACNUR, Colombia.
- BONILLA, R. (2011). *Apertura y reprimarización de la economía colombiana. Un paraíso de corto plazo*. *Nueva sociedad*, 231, 17.
- CÁRDENAS, M. (2000) *Reducción de la violencia en Colombia*. Departamento Nacional de Planeación, Colombia.
- CÁRDENAS, M. (2001). *Economic Growth in Colombia: A Reversal of 'Fortune'?* Center for International Development, CID Working Paper N. 83, Harvard University, Cambridge.
- CNN (2010). *Las mayores ganancias del narcotráfico se quedan en los países ricos: ONU*. Disponible en: <http://mexico.cnn.com/mundo/2010/06/17/las-mayores->

ganancias-del-narcotrafico-se-quedan-en-los-paises-ricos-onu. Accedido: 29 mayo 2014.

COHRE (2005). *Defensa del derecho a la vivienda de la población desplazada en Colombia*. The Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), Ginebra, Suiza.

COLLIER, P. (2000). *Economic causes of civil conflict and their implications for policy*. World Bank, 6-7.

COLLIER, P. (2003). Economía del conflicto. En: *Hacia una economía sostenible. Conflicto y posconflicto en Colombia*. Fundación Agencia Colombia, 127-140.

EL COLOMBIANO (2014). Ataques a oleoductos frenan avances de las petroleras. Disponible en: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/ataques_a_oleoductos_frenan_avances_de_las_petroieras/ataques_a_oleoductos_frenan_avances_de_las_petroieras.asp. Accedido: 29 mayo 2014.

COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS (2007). *Colombia 2002-2006: Situación de derechos humanos y derecho humanitario*. Bogotá.

COMISIÓN DE ESTUDIOS SOBRE LA VIOLENCIA (1987). *Colombia: Violencia y democracia*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Pontificia Universidad Javeriana.

EL CONFIDENCIAL (2012). *Las FARC anuncia el fin de los secuestros y liberará a todos los rehenes*. Disponible en: <http://www.elconfidencial.com/mundo/2012/02/26/las-farc-anuncia-el-fin-de-los-secuestros-y-liberara-a-todos-los-rehenes-93344>. Accedido: 29 mayo 2014.

CRAMER, C. (2003). *Does inequality cause conflict?* Journal of international development, 15, 1.

- DANE (2013). Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2013. Disponible: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Presentacion_ECV_2013.pdf. Accedido: 28 mayo 2014.
- DÍAZ, A. Y SÁNCHEZ, F. (2008). *Los efectos del conflicto armado en el desarrollo social colombiano, 1990-2002*. CEDE 58,
- DNP. (2013). Pobreza monetaria y desigualdad del ingreso. Dirección de desarrollo social. 12, 3-23.
- DURÁN, N. (2013). Colombia, el país con más desplazados en el mundo. El Espectador.
- ECHEVERRY, J. C. SALAZAR, N. Y NAVAS, V. (2001). ¿Nos Parecemos al Resto del Mundo? El Conflicto Colombiano en el Contexto Internacional. DNP-UMACRO.
- EL ESPECTADOR (2013). Colombia, ¿país de alto desarrollo humano?. Disponible: <http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/colombia-pais-de-alto-desarrollo-humano-articulo-410396>. Accedido: 28 mayo 2014.
- FUNDACIÓN PAÍS LIBRE (2013). Aumentan los secuestros extorsivos en Colombia. Disponible en: <http://www.paislibre.org/site/index.php/actualidad/noticias/2777-aumentan-los-secuestros-extorsivos-en-colombia-fundacion-pais-libre>. Accedido: 29 mayo 2014.
- GÓMEZ, C. M. (2001). Economía y violencia en Colombia. Universidad de Alcalá.
- GONZÁLEZ, A. M. (2006). *Convergencia Regional y Conflicto Armado Interno en Colombia, 1980-2004*. Tesis de economía. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

- GOULD, J. (2007). *The Failure of Plan Colombia*. The American Prospect. Disponible en: <http://prospect.org/article/failure-plan-colombia>. Accedido: 29 mayo 2014.
- HUMAN RIGHTS WATCH (2008). Child Soldiers Global Report 2008. Coalition to stop the use of child soldiers.
- HUMANAS (2012). Sistema de indicadores para hacer seguimiento a la Resolución 1325 – SI 1325. Corporación Humanas.
- IMF (2014). IMF Executive Board Concludes Article IV Consultation with Colombia. Disponible en: <http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14234.htm>. Accedido: 28 mayo 2014.
- ISAZA J. F. Y CAMPOS D. (2005). Modelos Dinámicos de Guerra: El conflicto colombiano. *Rev. Acad. Colomb. Cienc.* 29 (110), 133-148.
- GARRIDO, J. F. (2001). Guerra y pobreza en Colombia. *Estudios gerenciales* 17-81.
- GIMÉNEZ, G. Y OSPINA, N. (2009). La violencia en Latinoamérica y sus efectos sobre la inversión y la educación. *Estudios de Economía Aplicada*, 27-3, 8.
- GODED, M. (2008). *El marco económico y social*. Colombia en su laberinto. 1ª edición. Madrid: Catarata.
- KALMANOVITZ, S. (2011). El impacto económico del conflicto interno colombiano y un escenario de paz. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
- LEITERITZ, R., NASI, C. Y RETTBERG, A. (2009). *Para desvincular los recursos naturales del conflicto armado en Colombia. Recomendaciones para formuladores de política y activistas*. *Colombia internacional*, 70, 215-229.

- LÓPEZ, L. (2009). Efectos de la política de seguridad sobre el crecimiento económico en Colombia 1990-2006. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- LÓPEZ, C. Y GARCÍA, A. (1999). Los costos ocultos de la paz en Colombia. En: Solimano, A., Sáez, F., Moser, C. y López, C. El caso de Colombia y la experiencia internacional. Colombia: Banco Mundial. 13-15.
- LUXNER, L. (2014). Drug trafficking accord with FARC rebels stirs debate among Colombia experts. Disponible en: <http://www.ticotimes.net/2014/05/17/drug-trafficking-accord-with-farc-rebels-stirs-debate-among-colombia-experts>.
Accedido: 29 mayo 2014.
- MASSÉ, F. Y CAMARGO, J. (2012). *Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia*. Bogotá: CITPax Colombia. Observatorio Internacional DDR Justicia y Paz, 5.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (2012). Avances y retos del sector educativo. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-310052_archivo_pdf_30_julio_p1.pdf. Accedido: 28 mayo 2014.
- MOLLER, L. (2012). Breaking with history: Why Colombia needs a more progressive tax system. World Bank. Disponible en: <http://www.worldbank.org/en/news/opinion/2012/12/17/why-colombia-needs-a-more-progressive-tax-system>. Accedido: 28 de mayo de 2014.
- MONTENEGRO, A. Y POSADA, C. E. (1995). Criminalidad en Colombia, Coyuntura Económica 25, 1.
- MONTERO, D. (2012). De lo que viven las Farc sin el secuestro. Disponible en: <http://lasillavacia.com/historia/de-lo-que-viven-las-farc-sin-el-secuestro-31683>.
Accedido: 29 mayo 2014.
- NAFZIGER, E. Y AUVINEN, J. (2002). Economic development, inequality, war, and state violence. *Journal of Conflict Resolution*, 43, 267-90.

NESTARES, C. (2001). Empleo y delincuencia: la historia de una relación contradictoria. Disponible en: http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa/text5.html. Accedido: 28 mayo 2014.

NUÑEZ, J. RODRÍGUEZ, J. Y SÁNCHEZ, F. (1996). Evolución y determinantes de la productividad en Colombia: un análisis global y sectorial. Archivos de Macroeconomía, 50.

OCAMPO, J. (2004). Economía, conflicto y gobernabilidad en Colombia, Economía Colombiana (302), 27

ONTIVEROS, E. (2011). La desigualdad no es rentable. Disponible en: http://elpais.com/diario/2011/05/01/negocio/1304255667_850215.html. Accedido: 5 junio 2014.

EL PAÍS. (2013). Tasa de homicidios del 2013 en Colombia sería la más alta en los últimos siete años. Disponible en: <http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/tasa-homicidios-2013-seria-alta-ultimos-siete-anos>. Accedido: 28 mayo 2014.

PARRA, C. E. (1998). Determinantes de la Inversión en Colombia: evidencia sobre el capital humano y la violencia. Archivos de Macroeconomía, 84, 26.

PNUD (2003). El conflicto, callejón con salida. Informe nacional de desarrollo humano para Colombia. Bogotá, Colombia.

PNUD (2011). Colombia rural. Razones para la esperanza. Informe nacional de desarrollo humano para Colombia. Bogotá, Colombia.

PNUD (2013). Informe sobre desarrollo humano. Nueva York: Naciones Unidas

- REBOSSIO, A. (2014). Los mejores y peores países para trabajar en Latinoamérica. El País.
- ROJAS ARAVENA, F. (2011). Violencia en América Latina. Debilidad estatal, inequidad y crimen organizado inhiben el desarrollo humano. Pensamiento Iberoamericano, 2, 30.
- RUBIO, M. (1995). Crimen y crecimiento en Colombia. En: Colombia Debates de Coyuntura Económica. Colombia: Fedesarrollo. 101-127.
- RUBIO, M. (2002). Conflicto y finanzas públicas municipales en Colombia. CEDE. 17 (2), 1-15.
- SÁNCHEZ, F. Y CHACÓN, M. (2005). Conflicto, estado y descentralización: del progreso social a la disputa armada por el control local 1974-2002. CEDE, 1.
- SANÍN, F. G. (2004). Criminales y rebeldes: una discusión de la economía política del conflicto armado desde el caso colombiano. Estudios Políticos, 24.
- STEWART, S. (2013). Informe de stratfor: los mercados globales de armas a través del lente sirio. Noticias de Siria libres. Disponible en: <http://noticiasdesirialibre.wordpress.com/2013/07/25/informe-de-stratfor-los-mercados-globales-de-armas-a-traves-del-lente-sirio/>. Accedido: 29 mayo 2014.
- TRUJILLO, E. Y BADEL, M. (1998). Los costos económicos de la criminalidad y la violencia en Colombia: 1991-1996. Archivos de Macroeconomía, DNP-UMACRO.
- VARGAS, J. F. Y CARUSO, R. (2014). Conflict, Crime and Violence in Colombia. Peace Science and Public Policy, 20, 1-4.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION (2004). The Economic Dimensions of Interpersonal Violence. WHO, Paris, France.

WORLD BANK (2014). World Development Indicators. Disponible en: <http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators>. Accedido: 28 mayo 2014.

(2011). Global Burden of Armed Violence. Geneva Declaration.

(2012). Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. La Habana, Cuba. Disponible en: <https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf>. Accedido: 29 mayo 2014.

(2014). Sube deuda externa de Colombia. Disponible: <http://www.dinero.com/economia/articulo/deuda-externa-colombia-septiembre-2013/190277>. Accedido: 28 mayo 2014.

(2014). Más de 700 desapariciones forzadas se han presentado en los últimos 4 años. Disponible en: <http://www.bluradio.com/#!65305/mas-de-700-desapariciones-forzadas-se-han-presentado-en-los-ultimos-4-anos>. Accedido: 28 mayo 2014.